

ENTREVISTA

“La gente debe saber quién financia a cada partido”

Cuando el Estado aporta dinero a los partidos políticos, establece una base de igualdad en la competencia electoral, explica la jurista Delia Ferreira Rubio • Más que nuevas se necesita control sobre esos fondos

Por ANA LAURA PEREZ
De la Redacción de Clarín



La manera en que un país financia sus instituciones democráticas es tema permanente de discusión en todo el mundo. Aquí, fue el presidente Menem quien echó leños al debate cuando, hace poco más de un mes, vetó la partida presupuestaria que correspondía a los partidos políticos. Delia Ferreira Rubio —doctora en derecho por la Universidad de Córdoba y la Complutense de Madrid, codirectora del Centro de Estudios para Políticas Públicas Aplicadas y una de las mayores especialistas en el tema— compara distintos sistemas y señala algunos de los peligros que oculta el manejo oscuro de esos fondos.

■ **La relación entre política y dinero suele ser tormentosa. ¿Por qué se empezó a discutir la importancia del financiamiento político de un país?**

—En un principio la idea era que los partidos, como organizaciones privadas, se financiaran por su cuenta. Después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa, la gente fue entendiendo que para que la democracia funcionara bien hacían falta los partidos políticos, y se decidió que había que ayudar a financiarlos. El argumento central era que, si el Estado financiaba, garantizaba cierta igualdad en la competencia, porque si no un partido o un candidato con mucha plata o gran capacidad de recaudación (por estar vinculado a un sindicato o una empresa poderosas) tendría un punto de partida mejor que el de aquel sujeto muy inteligente, muy capaz, con buenas ideas pero sin un peso para pagar un afiche. Después, el proceso lleva a que las Constituciones incorporen a los partidos como instituciones de la democracia.

■ **¿Cuándo se incorporan los partidos a nuestra Constitución?**

—Con la Reforma Constitucional del 94, donde se dice que los partidos son instituciones esenciales de la democracia, que el Estado les garantiza su organización, contribuye a su sostenimiento y les da libertad para formarse, siempre que respeten los principios del estado de derecho.

■ **¿Cómo financia nuestro país a sus partidos políticos?**

—Hay un financiamiento directo, que surge del Presupuesto: cada año se establece una partida para el fondo partidario permanente (para el sostenimiento de los comités, la formación de dirigentes, etcétera) que administra el Ministerio del Interior y se distribuye con una fórmula que evalúa los votos obtenidos y las bancas que el partido tiene en el Congreso. Amén de eso, hay un



DEFENSOR. Según Ferreira Rubio falta un “ombudsman” de la política.

aporte por voto, que es por cada elección para hacer la campaña electoral. Ese es el aporte de 3 pesos que Menem ha vetado. También hay un financiamiento indirecto para las campañas, que es darles espacios en radio y televisión. Por último, hay formas espurias de destinar fondos públicos a la campaña del oficialismo: los bonos del tesoro o los créditos internacionales para financiar proyectos en provincias adictas al Ejecutivo, por ejemplo.

■ **¿Cómo se controlan los fondos públicos destinados a los partidos?**

—El control lo hace la Justicia Nacional Electoral. Cada juez federal número 1, hay uno en cada distrito del país, es el que tiene la competencia electoral y de partidos políticos. Pero ese juez tiene toda la competencia de los temas federales, penales, civiles federales y, además, tiene que organizar todo lo relativo a la elección y al control de los balances de los partidos.

■ **Control que en la práctica no se ejerce...**

—No tiene infraestructura ni especialización para hacerlo. En otros países (y le hablo de Latinoamérica) hay organismos que organizan la elección, se encargan del escrutinio y de repartir y controlar los fondos públicos y privados de los partidos.

■ **¿Hay frenos para la circulación del dinero negro?**

—No hay ley que impida el financiamiento encubierto de la política. En el caso norteamericano, por ejemplo, los bancos no pueden donar fondos a los partidos políticos. Eso no quiere decir que un banco no pueda pagar una encuesta donde se incluyan algunas preguntas que al candidato de turno le resulten interesantes para medir su popularidad. En los Estados Unidos, como en Francia, las leyes van incorporando estos financiamientos indirectos como parte oficial del presupuesto de campaña. El di-

nero en negro no se va a parar con una ley. Ni acá ni en ninguna otra parte.

■ **¿Con qué mecanismos podría evitarse?**

—En otros países, para incentivar la transparencia se otorgan ventajas impositivas. Los alemanes, por ejemplo, están probando un mecanismo de “equiparación de fondos”. El partido puede recolectar fondos entre la gente y el Estado le da en proporción, con lo cual el partido tiene que transparentar lo recogido en la sociedad.

■ **¿Por qué cambiaron de sistema?**

—Antes el financiamiento público correspondía a los partidos, con independencia de lo que recaudaran en la sociedad y eso los transformaba en una especie de burocracias paraestatales que no tenían ningún interés en conectarse íntimamente con la gente, salvo en el momento de la campaña electoral. En esta materia, con la puesta en marcha de una ley surgen nuevos mecanismos ilícitos de encubrimiento.

■ **¿Ver lo que pasa en el resto del mundo cambia un poco la idea de que aquí hay más corrupción que en otros países?**

—El fenómeno no es sólo argentino.

■ **¿Pero se puede intuir que la corrupción está ligada a la debilidad institucional?**

—En parte sí, porque cuando las instituciones son fuertes los organismos de control también lo son. La gente se queja porque desconfió de la política y dice: “¿Por qué el Estado, en vez de atender las escuelas y hospitales, se va a dedicar a financiar la política?”

■ **Es una buena pregunta.**

—El peligro es que los funcionarios y legisladores dejen de representar a la gente para representar a la empresa cual, la central tal o el sindicato aquel.

■ **También puede pasar que los representantes sean sólo gente de dinero.**

—En EE.UU. se ha detectado eso. Como el

financiamiento público optativo existe sólo en la campaña presidencial, cada candidato tiene que buscar el dinero por su lado. Y eso ha hecho que el Senado se esté transformando en un cuerpo de ricos. Ahora, si no se trata de candidatos de fortuna personal, el peligro es todavía mayor: van a favorecer que equis empresa financie la campaña de un político y que el día que ese señor gane, atenderá antes a ese empresario que al ciudadano común.

■ **¿Cómo se evita ese peligro?**

—Generando cierta base de igualdad con el financiamiento público.

■ **¿El financiamiento privado no tiene aspectos positivos?**

—Lo positivo es el contacto con la gente. Si se limitan los aportes no habrá una multinacional que dé fondos sino muchos aportantes chiquitos. Buscaría un equilibrio entre financiamiento público y privado.

■ **¿Hay otras soluciones más prácticas?**

—Una posibilidad es acortar las campañas electorales —en Europa duran, a lo sumo, tres meses— y otra es poner límites a los gastos de campaña. A mí me parece que eso también es cuestión de disciplina y de práctica democrática: a lo mejor, dentro de 10 años, será normal que los partidos se reúnan y digan: “Vamos a gastar tanto y la campaña no puede durar más de tanto”.

■ **¿Cuál es la clave para mejorar el sistema argentino?**

—Yo creo que más que poner restricciones y límites nuevos, tenemos que tratar de que la gente sepa quién financia a quién.

■ **¿Y cómo podríamos saberlo?**

—Yo imagino un defensor de la transparencia electoral semejante al defensor del pueblo, que recogería la información de lo que los partidos están recibiendo y gastando en una campaña para publicarla días antes de la elección.

■ **¿Para qué serviría esa información antes de unos comicios?**

—Le contesto con un ejemplo: en Francia, meses después de una elección, una revista de investigación política descubrió que el partido verde —Generation Ecologie— había recibido el grueso del financiamiento de su campaña del laboratorio Sandoz, responsable por años de la contaminación del río Rin. Como en este caso, saber quién está detrás permite deducir cuán cierto es el discurso de una persona. Esa chance no la tenemos. Muchos preguntan: “¿Por qué los periodistas no investigan?” “¿Pero qué quieren que investiguen si el Boletín Oficial, que no lee nadie, publica un balance tipo “18 millones de ingresos, 18 millones de gastos, saldo 0”.

Ahora, si un funcionario encontrara que un partido declaró 5 pero gastó 35, bueno, esa información sería más interesante.

■ **¿Por dónde habría que empezar para mejorar el sistema?**

—Primero, por la transparencia y después, por la creación de un organismo independiente del poder político de turno. Acá faltan honestidad y una cultura cívica que rescaten los valores de la República y del cumplimiento de la ley.

Copyright Clarín, 1999.